Approved For Release 2005/04/22 : CIA-RDP83-00415R005300010004-7

25X1

Approved For Release 2005/04/22 : CIA-RDP83-00415R005300010004-7

Approved For Release 2005/04/22 : CIA-RDP83-00415R005300010004-7

SANGRE Y MISERIA COMO OBRA DE GOBIERNO

La inmolación de casi un centenar de ciudadanos en las calles y plazas de La Paz, bajo la metralla de los sayones del régimen, el 1º y 2 de mayo de 1949, marcó la iniciación del período más duro en la larga y sacrificada lucha por la liberación nacional.

En las elecciones del 1º de mayo, el pueblo reiteró su profundo repudio por el régimen Hertzog - Urriolagoitia, eligiendo en todos aquellos distritos importantes en que pudo expresar su opinión con relativa libertad el día de los comicios, a todos los candidatos del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el partido que por su capal planteamiento de los problemas bolivianos y por su sacrificada, nítida e inquebrantable posición de lucha, había colocado como el abanderado de las mayorías nacionales.

Dempstró así nuestro pueblo que estaba alcanzando la madurez política y que no habría de prestarse más al engaño de las falsas posturas democráticas, siendo ya inútiles para conducirlo los mecanismos de propaganda de sus opresores. Habían resultado vanos los confinamientos, los destierros, las prisiones, las torturas, las monstruosas calumnias contra los nacionalistas. El pueblo ya sabía escoger a sus auténticos representantes.

Al constatar la formación de esa conciencia popular, que había encontrado su medio de expresión democrática en las elecciones, el régimen tiránico que falazmente y buscando puntos de sostén internacional, se autocalificaba de democrata, abandonó la máscara, mostrándose brutalmente en su verdadera faz. Cuando la masa ciudadana se reunió en la plaza pública para exteriorizar su júbilo por el triunfo en las elecciones de ese día, fué bárbaramente ametrallado, continuando la matanza al día siguiente. Ante la demostración cívica del pueblo, el gobierno reaccionó eligiendo el camino de la violencia desenfrenada, propio de las minorías detentadoras del poder.

Vacilante en la ejecución y atemorizado ante la tremenda responsabilidad de la masacre, no obstante haber contribuido decisivamente con su prédica de odio a crear el ambiente propicio, el presidente Hertzog fué de inmediato radiado del poder, encargándose el mando al vicepresidente Urriolagoitia, cuya irresponsabilidad le señalaba como el instrumento ideal para llevar a cabo la nueva política de terror y sangre que la Rosca había resuelto implantar.

Una visión retrospectiva del panorama nacional muestra una agravación del largo calvario que sufre el pueblo boliviano en manos de sus opresores, y a un año de la masacre de La Paz, encuentra a la nación toda, llevada por la acción de un gobierno despótico, inepto, y rapaz, en una situación próxima al desastre final.

Las libertades y garantías individuales y los derechos políticos reconocidos por la Constitución y las leyes, en el hecho no existen más para la gran mayoría de los ciudadanos. El estado de sitio, medida de excepción dentro de la mecánica constitucional, se ha convertido en recurso normal y de aplicación constante.

En incesantes redadas policiales y con vandálicos allanamientos de domicilio, millares de ciudadanos han sido detenidos para ser luego confinados en campos de concentración, en lugares inhóspitos y en malsanos parajes o arrojados a países extranjeros, donde, sobrepasando las fronteras a cambio de sabe qué secretos compromisos atentatorios del porvenir nacional, ha continuado la persecución. La violencia oficial no se ha detenido ante el precepto de la Constitución que expresamente prohibe el destierro por causas políticas, sinó que ha sometido a esa medida, y también a prisiones y confinamientos, a senadores y diputados, desconociendo las inmunidades que les acuerda el código político y que son de práctica universal.

Privados de sostén, sufren miseria y penurias los hogares de los presos, de los desterrados y de los confinados. El embargo de bienes, el bloqueo de fondos, la negación de créditos, la notificación a la industria y al comercio para no proporcionar trabajo a los afiliados al MNR, son medidas de extorsión económica que utiliza también la saña persecutoria.

La violación y el secuestro de la correspondencia postal y telegráfica son practicados sistemáticamente junto con la intervención de las comunicaciones telefónicas.

Ningún gobierno ha llegado más lejos que el actual en su desprecio por la libertad de prensa, pese a sus hipócritas declaraciones en contrario. Toda posibilidad para la existencia de periódicos de auténtica oposición ha sido cancelada, llegándose al extremo de intimar a los establecimientos gráficos, mediante arrestos, allanamientos y secuestros, a no hacer publicación de ningún género para el MNR.

Hace cuatro años que no se permite al partido efectuar una asamblea pública, y la más pequeña reunión de elementos nacionalistas da lugar a su apresamiento, bajo el consabido pretexto de estar tramando un complot revolucionario.

Con acusaciones fraguadas, más de un millar de ciudadanos —casi todos los dirigentes del partido y las más importantes organizaciones sindicales— han sido sometidos a diversos juicios que, obedeciendo sólo a la finalidad de invalidarlos políticamente y privarles de libertad, se mantienen sin llegar a término.

El régimen ha hecho mofa del sistema democrático representativo, con la prisión, el destierro o el confinamiento de todos los senadores, diputados y municipes del MNR y del Bloque Minero, que habían sido elegidos por abrumadoras mayorías y superando las condiciones más adversas.

Más de diez mil ciudadanos han sido privados prácticamente del derecho de sufragio, mediante la supresión de los distritos mineros y petroleros, y el robo y cancelación de registros electorales, llevados a cabo por las autoridades, para abrir otros nuevos con la exigencia de requisitos ilegales, como el certificado policial de buena conducta que es negado a los ciudadanos nacionalistas.

Series interminables de atropellos, las más inauditas atrocidades convertidas en cosa normal, el desconocimiento de los derechos individuales por la prepotencia de la autoridad, la persecución sistemática y la burla de los resultados electorales, muestran al gobierno de Urriolagoitia como un verdadero régimen policiaco.

Una política antiobrera, que no es la de los regímenes conservadores corrientes si no algo único, más retrógrado y primitivo, ha puesto en práctica el actual gobierno, como una fase de su servidumbre a los grandes consorcios económicos.

A la matanza de trescientos mineros en Potosí, siguió la autorización para el despido en masa de diez mil trabajadores de la Patiño Mines, a objeto de interrumpir su antigüedad para los efectos de indemnización y poder recontratarlos en condiciones de inferioridad, "aventando", a la vez, a todos los elementos dirigentes a quienes se consignó en listas negras que les impiden encontrar trabajo asalariado en el país.

La Rosca necesitaba liquidar a las organizaciones de trabajadores que, mediante la acción colectiva ejercitada dentro de las normas vigentes, exigían el cumplimiento de las leyes sociales dictadas por el MNR, y solicitaban aumento de salarios para compensar la vertiginosa elevación del costo de vida consiguiente a la política inflacionista del actual régimen.

Al menor intento de acción social los dirigentes de los sindicatos mineros, fabriles y petroleros han sido apresados, confinados o desterrados por esbirros del Ministro Mollinedo, a quien no bavarán la culpa sus fementidas posturas socializantes de hora nona. El desconocimiento de la personería jurídica de las uniones obreras, las maniobras divisionistas con el empleo de dineros fiscales, la congelación de los fondos de las entidades gremiales, el atropello al fuero sindical, las reglamentaciones caprichosas y otras trabas han sido armas complementarias en el empeño oficial por destruir el movimiento sindical.

El Poder Ejecutivo declaró "sujetas a régimen militar" a las zonas mineras y petroleras, sometiendo a los obreros a un sistema de trabajo bajo fusiles, y utilizó también la movilización militar para anular demandas reivindicatorias de los obreros ferroviarios.

Resultando inútiles tales medidas ante la profunda conciencia política y social que el MNR había formado en los trabajadores, puesto ya Urriolagoitia en la presidencia de la República, la Rosca planeó anticipadamente y con minuciosidad la realización de la masacre de Cataví. Necesitaba terminar, sangrienta y ejemplarizadoramente, de una vez por todas, con el movimiento de reivindicaciones sociales.

Con el propósito de provocar en la opinión internacional una reacción contraria a los obreros, buscó intencionadamente, con inhumano refinamiento, el sacrificio de técnicos extranjeros. Los dejó sin informaciones y sin ninguna protección mientras que, mediante atropellos y provocaciones, como el apresamiento y destierro del senador Lechín, diputados Torres y Lora y otros dirigentes de la FSTMB, y la disolución a metralla de una asamblea de trabajadores, empujaba a éstos a la huelga y al empleo de la violencia para repeler la violencia.

En una verdadera operación de guerra, con el fuego de ametralladoras y morteros y el empleo de aviones, el gobierno reprimió la huelga, matando más de setecientas personas, entre hombres, mujeres y niños. Era ésta una de "las grandes soluciones" que anticipaba sibilinamente "La Razón" en su editorial de cuatro días antes de la masacre, titulado "Principio de autoridad". Colocado en el mando para llevar a cabo hasta sus últimos extremos la nueva política de sangre, el presidente Urriolagoitia cumplió, así, lo dispuesto por el gobierno invisible, fisonomizándose definitivamente ante la historia.

Tras de masacrar al pueblo de La Paz y a los mineros de Cataví, Llallagua, Siglo XX y Huanuni, el gobierno hizo escarnio de la voluntad popular.

El oficialismo no vaciló en recurrir a los medios más reprobables para impedir la presencia en el Parlamento de los representantes del MNR y del Bloque Minero, quienes habían anunciado el planteamiento de un pliego acusatorio por las matanzas, y que con la valentía y sinceridad que han caracterizado la lucha del nacionalismo, iban a poner en evidencia a los saqueadores de los recursos públicos, a señalar a los traficantes con el poder del Estado, y a desenmascarar a quienes titulándose demócratas eran en realidad la antítesis.

El Ministro de Gobierno urdió una maquinación curialesca contra los representantes nacionalistas, pretendiendo involucrarlos como causantes —en un trastrueque de papeles propio del cinismo del régimen— en los hechos que él mismo había perpetrado. Simultáneamente, impedía el regreso al país de los que se encontraban en el destierro y sometía a persecución a los que permanecían dentro de la República, hasta tanto la mayoría pursista, elegida por la violencia y el fraude, cumpliera su parte complicándose también con aquella maquinación.

El atropello, la violencia y el desenfreno policíacos habíanse hecho intolerables. La conducta del gobierno, que reiteradamente cerraba el camino electoral al MNR y privaba a la ciudadanía de las vías legales para la expresión de su voluntad, desconociendo los resultados de los comicios, precipitaba a las vías de hecho.

La miseria popular resultante de la estructura económica y social del país, agravada últimamente por obra de los gobernantes, se sumó a los factores de orden puramente político, como otro de los determinantes revolucionarios inmediatos.

Presionando tales hechos en su entrafia misma, como partido de raíz popular, y ante la visión del país todo, llevado hacia el caos y la bancarrota por el envilecimiento de la moneda, la corrupción administrativa y la ineptitud gubernamental, patentizada en el desculdo de los problemas fundamentales y la ausencia de realizaciones de importancia, el MNR consideró un deber cívico levantarse contra el régimen de robo, sangre y exterminio que oprimía a la patria.

Obstruidas las pacíficas vías electorales para la acción política y prácticamente cancelados los medios de expresión democrática, la nación no tenía otro camino que la revolución para reorganizarse democráticamente, y una vez recuperada su libertad, resolver sus angustiosos problemas al amparo de las normas institucionales.

El 27 de agosto estalló la rebelión popular, encabezada por el MNR, con la participación de algunos sectores de juventud nacionalista y de valiosos jefes y oficiales del ejército en servicio activo y en situación de retiro.

Esperada ansiosamente, la insurrección fué recibida con júbilo por las poblaciones porque veían en ella la posibilidad de que pusiera término a la política de terror y porque abría una perspectiva de alivio a su desesperada situación económica. El pueblo depuso también a las autoridades que representaban a la oligarquía central en las provincias y ciudades menores, las que así participaban activamente y por primera vez en una conmoción política de envergadura nacional.

Munidos de poderes amplios y extraordinarios y alentados con millonaria distribución de dinero, los jefes militares de la Rosca, movilizando una poderosa maquinaria de guerra, procedieron a aplastar sanguinariamente la insurgencia popular, haciendo gala de una decisión y un denuedo que muchos de ellos no tuvieron frente al enemigo extranjero. Una a una fueron cayendo en manos de sus tropas las ciudades que se habían levantado contra el poder de la Rosca. Después de más de veinte días de operaciones, la superioridad del aparato bélico gubernamental se impuso sobre los destacamentos del ejército revolucionario. Los jefes victoriosos, con la técnica que ya habían aplicado en Cataví, ejercitaron toda suerte de represalias sobre los prisioneros, pasando por las armas a muchos de ellos sin forma ni figura alguna de juicio.

Incontables fueron los rasgos de heroísmo y de abnegación, en los que el derroche de valor y audacia y el espíritu de sacrificio trataron de compensar la deficiencia de armamento de las fuerzas revolucionarias. Altos dirigentes del MNR que luchaban en las líneas avanzadas codo a codo, con los ciudadanos soldados; obreros mineros y petroleros que percibiendo el sentido vital que tenía para ellos la revolución no escatimaban riesgo a su vida. Hombres de las ciudades y del campo, veteranos de la guerra con el Paraguay que con sus propias armas y sus cabalgaduras se incorporaban a los escuadrones revolucionarios. Intelectuales, universitarios, jefes y oficiales del servicio activo y en situación de retiro, aviadores civiles y militares, profesionales, jugaron su tranquilidad, sus situaciones personales y las de los suyos, plegándose a la revblución. Cadetes, suboficiales. clases, oficiales de carabineros que no habían vendido su conciencia al dinero, comandaron las fracciones de civiles y las de los soldados que se unieron al movimiento.

Cuando haya desaparecido el terror imperante, que busca víctimas en quienes cebar su afán de venganza, será el momento de presentar todo el detalle de las acciones revolucionarias, con el heroísmo, el sacrificio, la abnegación y la encendida fe que animó a los hombres —civiles y militares— que jugaron sus vidas buscando un mejor porvenir para la patria.

La calumnia, manejada sin límite por el gobierno y la prensa de las compañías mineras, pretendió desfigurar el sentido de la revolución, mostrándola como un movimiento militarista o un golpe de ambiciosos, que obedecera a inspiraciones foráneas.

La revolución del 27 de agosto fué un movimiento popular y no un pronunciamiento militarista. Fué auténticamente nacional y no respondió a ningún interés extranjero. Tampoco fué obra de ambiciosos que buscaban el poder ni de demagogos empeñados en sembrar la intranquilidad y el caos.

En Bolivia, la revolución es un fenómeno que está planteado permanentemente mientras subsista la actual estructura económica bien social. Se concretó en hechos en agosto de 1949, porque las contradicciones de ésta se habían agudizado y coincidieron con un recrudecimiento de la opresión política, alcanzando el punto crítico del estallido.

Cuando cuatro quintas partes de la población boliviana tienen un nivel de vida infra humano, en nada superior al que encontraron los españoles al llegar a América hace cerca de quinientos años; cuando la explotación de las riquezas naturales apenas si deja beneficio al país y sólo sirve para hacer más ricos a unos pocos ya inmensamente ricos, y más pobre aún a la inmensa mayoría de sus habitantes ya inconcebiblemente pobres; cuando la hegemonía que ejercen en la vida nacional las grandes compañías cierra toda posibilidad a los profesionales, los pequeños comerciantes e industriales para que puedan surgir y lograr una situación independiente si no es poniéndose al servicio directo o indirecto de tales empresas; cuando el Estado sometido al poder de éstas o constituido en su instrumento, se halla incapacitado para realizar las obras públicas y poner en marcha los servicios que Bolivia requiere de modo angustioso, precisamente por ser un país económica y socialmente atrasado; cuando la vida transcurre para la mayoría de los bolivianos sin ningún aliciente o compensación y falta de toda seguridad para el porvenir, no están dadas, evidentemente, las condiciones para que pueda la República tener estabilidad política.

Existiendo causas profundas que determinan el malestar económico y social, y dados los factores circunstanciales —de orden económico y político imputables al actual gobierno— que las agravan, la revolución de agosto no necesitaba de intervenciones foráneas ni del auxilio de gobiernos extranjeros para producirse.

No contó absolutamente con ninguna ayuda financiera ni de materia bélico de entidad o gobierno extranjero alguno. Si la revolución hubiese dispuesto de armas y municiones en la forma que la aviesa propaganda oficial trató de presentar, habría vencido, sin lugar a dudas, porque tenía el apoyo de todo el pueblo, mientras que el gobierno sólo contaba con el ejército y las policías.

La calumnia de ayuda extranjera sólo tuvo finalidades circunstanciales de escándalo político interno e internacional, buscando desacreditar al MNR que entonces era y sigue siendo ahora, aún derrotado militarmente, la fuerza política decisiva en esta etapa de la historia boliviana.

La victoria del aparato bélico de la Rosca, si bien aplastó la insurgencia del pueblo, no hizo el milagro de cambiar la naturaleza del régimen. Al contrario, considerándose éste, en la euforia del triunfo, ya libre de la acción vigilante del partido, rompió todo freno, acentuándose la crueldad, corrupción, ineptitud y servidumbre a los grandes consorcios mineros que caracterizan su acción.

Si no fuera por que el baño de sangre en que ha sumido al país lo ha marcado de modo indeleble, el presente podría llamarse el régimen de la rapacidad o cleptocracia. La corrupción se ha extendido como un cáncer, a todas las reparticiones del Estado. Desde las más altas autoridades hasta los más subalternos empleados pertenecientes al partido oficial realizan escandalosos negociados, transformándose en millonarios como por arte de magia, mientras el pueblo es sumido en la mayor miseria.

En una simbiosis fatídica, a la rapacidad se junta la ineptitud del elenco gobernante, para profundizar el malestar económico que sufre Bolivia, llevándolo a un límite que no tiene precedente ni en la depresión del año 30. No puede ser más desoladora la visión que ofrecen al presente, la economía y las finanzas nacionales precipitadas a un completo desbarajuste.

Por su propia naturaleza de gobierno minoritario, sostenido por la violencia, requiere de un permanente derroche de los fondos del Estado. El elefantiásico incremento del presupuesto de policías, las millonarias sumas de gastos reservados, los sueldos dobles a los jefes masacradores, las subvenciones de favor, los viajes al extran-

25X1

Approved For Release 2005/04/22 : CIA-RDP83-00415R005300010004-7

Approved For Release 2005/04/22 : CIA-RDP83-00415R005300010004-7

jero para premiar a los favoritos y compensar a los desplazados, las adquisiciones a precios inflados para dar margen a coimas y participaciones, son causas, entre otras, del crecimiento del capítulo de gastos del presupuesto nacional.

Inversamente, la complacencia con los grandes contribuyentes, reduciendo el monto real de sus obligaciones tributarias, sumada a la ineficacia de los mecanismos de recaudación, a cargo de elementos del partido oficialista, carentes de capacidad técnica y moral funcionaria, y a la cadena de defraudaciones, tienen por resultado una reducción cuantiosa de los ingresos fiscales efectivos.

El presupuesto nacional, sin orden ni concierto, ha sido votado todos los años ya muy avanzada la gestión y sólo mediante decreto del Ejecutivo, consignando déficits iniciales por muchos cientos de millones de bolivianos.

En vez de desarrollar un plan orgánico para el equilibrio presupuestario, que salvara la falencia fiscal provocada por él mismo, el gobierno Hertzog Urriolagoitia sólo ha atinado a acudir al cómodo recurso de los préstamos inflacionarios en el Banco Central, por miles de millones de pesos. Mientras el gobierno de Villarroel mantuvo las obligaciones del Estado en el instituto emisor, prácticamente estacionarias en alrededor de 750 millones de bolivianos, como las encontró, el régimen rosquero, en poco más de tres años las ha elevado a cerca de 3.000 millones.

Pero el gobierno actual no sólo va a esa irresponsable política de inflación con el fin de arbitrar fácilmente los miles de millones que devora la voragine presupuestal, sino que la lleva a cabo en un deliberado propósito de crear condiciones para la desvalorización de la moneda nacional, en servicio de las compañías mineras. Como éstas reciben en dólares el valor de las explotaciones, mediante aquel recurso logran rebajar indirectamente sus costos, al no operarse de modo sincrónico el reajuste de salarios, impuestos y demás gastos en moneda nacional, en la proporción en que ésta es depreciada.

Los caracteres galopantes de la inflación manifiéstanse en que el total del circulante combinado ha subido a más de 4.200 millones de bolivianos, e inversamente ha disminuido el encaje de oro y divisas.

Mas, la inflación que proporciona recursos al gobierno y beneficia luego a las compañías mineras, empobrece a la población que vive de sueldos y salarios, pensiones, jubilaciones u otras rentas fijas, reduciéndole automáticamente el poder adquisitivo de sus ingresos, con el alza del costo de vida que es su secuela inevitable.

No obstante haber tenido durante los años 47 y 48 los ingresos en divisas más altos conocidos en Bolivia, con una cotización del estaño de cerca del doble de la vigente en la época de Villarroel, el desorden en su manejo, el derroche en concesiones especulativas, en viajes de placer o para la importación de artículos suntuarios, han dilapidado esos recursos, encontrándose ahora el país falto de moneda extranjera hasta para sus importaciones más premiosas.

Actuando tales factores sobre el costo de vida, necesariamente tenían que incidir en el campo social, originando los trastornos ocurridos durante el actual período, en los que también ha sido puesta en evidencia la inhabilidad del gobierno para encontrar un justo equilibrio entre los elementos que intervienen en la producción.

No hay en los gobernantes de este período ninguna preocupación por servir las necesidades de la colectividad sino tan sólo un desenfrenado afán de lucro inmediato, sin que les importe que sea ilícito y a costa del pueblo. La escasez de artículos tan indispensables como el pan, azúcar, carne, y otros que hace más dura la tradicional pobreza del pueblo boliviano, coexiste con la abundancia de automóviles de lujo, joyas, pieles y toda clase de artículos suntuarios. La dramática vida de quienes comen una sola vez al día o un plato único, ofrece un acusador contraste con el derroche y la disipación insultantes de la oligarquía.

Los casos señalados de negocia gubernamental no son los únicos. Al contrario, se dan en todos los campos de la acción estatal. No es necesario citar ejemplos porque cada sector de la colectividad sufre sus consecuencias en carne propia y tiene plena conciencia de lo que ocurre, por sobre las tergiversaciones de la prensa de las compañías mineras.

Como es inocultable el malestar económico, los hombres del gobierno han buscado sucesivos pretextos para explicarlo. Lo atribuyeron primero a "la tiranía nazifascista de Villarroel - Paz Estenssoro", luego a la agitación social, después a la baja del precio del estaño y por último, a la acción de los comunistas. La verdad es que en Bolivia no puede haber bienestar y prosperidad para el pueblo, mientras el poder del Estado se encuentre al servicio exclusivo de las grandes empresas mineras, porque hay una permanente contraposición entre el ciego egoismo de éstas y los intereses generales de la nación.

La incapacidad y el sometimiento a los grandes consorcios mineros que ha caracterizado la acción gubernamental en más de tres años, hace que resulte catastrófico para el país el descenso transitorio de la elevada cotización del estaño de que dispuso durante casi todo ese período.

Después de una serie de decretos de efímera vigencia, de órdenes y contraórdenes, de exaltación y denuesto de sus propios personeros, en una aparente vacilación propia de quienes no saben lo que les mandan hacer, pero dentro de una constante de peculados, derroches y creación de condiciones para el envilecimiento de la moneda, por fin, el gobierno ha llegado a concretar en un conjunto de decretos las medidas con que pretende afrontar la difícil situación a que él mismo ha llevado a la economía nacional.

Servil instrumento de las empresas mineras, ha creído encontrar una solución sacrificando a la mayor parte de los sectores de la economía del país en beneficio de uno solo. En síntesis, las medidas adoptadas, desvalorizando oficialmente la moneda nacional de Bs. 42 a Bs. 60 por dólar, para los artículos de consumo indispensable y a Bs. 100 para los restantes, no significan sinó la concesión de un subsidio anual en favor de los exportadores mineros, de más de 500 millones de bolivianos que tiene que ser pagado por toda la población con el alza del costo de vida.

Insensible a la suerte de la colectividad, pero cumpliendo su función esencial de agente de la Rosca en las propias medidas que —según dice— dicta para encarar el malestar económico, está creando nuevos factores inflacionistas con el fin de continuar la desvalorización de la moneda en servicio de aquella. No significa otra cosa, en verdad, el reavalúo del oro y divisas del Banco Central, reputando como utilidad la simple diferencia de números que arroja el juego contable, para tomarla como ingreso del presupuesto en un 50 por ciento y aplicar la otra mitad a la amortización de las deudas del Estado en el mismo Banco. Al considerar como recurso fiscal efectivo una diferencia puramente numérica lo que se va a hacer, en realidad, es emitir billetes por algunos cientos de millones más, que tomará el gobierno para continuar en su orgía de gastos. La reducción ficticia del monto de las obligaciones fiscales, con un abono exclusivamente numérico, es un engaño más cuya finalidad es permitir la colocación de nuevos préstamos en el instituto emisor.

Insidiosamente, el gobierno continúa, pues, la política inflacionista. Bajo su influencia y porque ya están dados los pasos previos, en los mismos decretos, al establecer cambios diferenciales en favor de los empresarios mineros para los casos de contratos especiales, vendrá una nueva desvalorización oficial del peso boliviano, llevando a Bs. 100 por dólar el tipo de compra y el vigente para la importación de artículos indispensables.

Jugando con la credulidad pública, con el decreto que aparece restableciendo para los exportadores la obligación de venta de divisas en un cien por ciento, pretendió dar la impresión de una igualdad en los sacrificios, mostrando como que los imponía también a los grandes empresarios mineros, pero la farsa quedó al descubierto al ser dejado en suspenso tan luego como desapareció la amenaza de huelga general a mediados de abril. La finalidad de embaucamiento ya era visible en las martingalas del procedimiento establecido para la atención de necesidades de moneda extranjera de las empresas, que aún en el caso de entrar en vigor, hacía que la obligación del cien por ciento no fuera sino mera apariencia.

Parte del mismo plan de desfiguración y encubrimiento de los efectos reales de las medidas, es el aumento acordado sobre sueldos y salarios. Las proporciones fijadas resultan exiguas no sólo ante la magnitud real de la pérdida de poder adquisitivo que ha experimentado el peso boliviano en los últimos tiempos, sino aún con relación a los porcentajes de la reciente desvalorización oficial.

Los procedimientos y recursos de que se ha valido el gobierno para quebrar los justificados movimientos gremiales producidos a consecuencia de las últimas medidas monetarias, pretendiendo mostrarlos como si fueran parte de una conspiración comunista, confinando a dirigentes sindicales y, por último, burlándose de la palabra empeñada por sus propios y autorizados personeros para sofocionar las huelgas, vuelven a mostrarlo tal como es en esencia: un incondicional instrumento de la Rosca.

Suenan a hueco las frases de "gobierno y política socialista" de las alocuciones presidenciales y los considerandos capciosos de los decretos, ante la realidad de las disposiciones que no es otra que la agudización de la miseria colectiva.

Resulta extraña también la actitud del presidente y su partido que pretenden ahora, con gran despliegue de propaganda, aparecer empeñados en una amplia acción anticomunista, porque hasta ayer nomás actuaban en estrecha colaboración con el partido representativo del stalinismo en Bolivia y ya que, aún en el presente, muchos de sus elementos, algunos de ellos infiltrados en el propio partido oficial, continúan desempeñando importantes cargos públicos.

La finalidad de la maniobra de Urriolagoitia es poder utilizar la bandera anticomunista, buscando la simpatía continental, para continuar la persecución contra sus adversarios, casi todos los ciudadanos de Bolivia, y contra los trabajadores en especial, con el propósito de liquidar las organizaciones sindicales existentes en el país. De ahí que, a pesar de su bullanguero anticomunismo, prosiga desarrollando la política de empobrecimiento de las clases laboriosas, que ofrece las condiciones más propicias para el desarrollo del comunismo.

La acción destructiva de la camarilla detentora del poder, —sostenida por un brutal aparato policíaco y un mecanismo propagandístico de encubrimiento— ha puesto a Bolivia en trance de tragedia final.

Desaparecida toda norma jurídica en la vida institucional, el gobierno se ha colocado al margen de la legalidad, convertido en tiránico poder. La situación económica ha alcanzado el filo mismo del desastre. El Estado próximo a la bancarrota, envilecida la moneda, disminuida la productividad de la industria básica y sumida la población en la más espantosa miseria. La irresponsabilidad gubernamental no sólo está liquidando todas las posibilidades económicas en que pudiera asentarse un resurgimiento futuro, sino que va socavando los cimientos morales indispensables para la supervivencia de todo agregado social.

El mal es de una gravedad no conocida hasta hoy en la vida nacional, y su solución con el actual gobierno encuentra grandes obstáculos. Un régimen sin ningún crédito moral, falto de autoridad y corrompido por el afán de lucro de sus hombres, con la oposición rencorosa de las masas trabajadoras a las que ha masacrado y oprime sistemáticamente, repudiado por toda la población, sin respaldo político real y carente de elementos honestos e idóneos en su elenco dirigente no podrá jamás afrontar con éxito los complejos problemas que presenta esta etapa de la vida boliviana.

Un gobierno que se coloca fuera del ordenamiento jurídico, quebrando las normas legales que rigen el funcionamiento del Estado y la convivencia ciudadana, ya no posee la condición esencial de su existencia y pierde el derecho a la obediencia de los ciudadanos.

Paz y tranquilidad son condiciones imprescindibles para que pueda lograrse la rehabilitación de la economía nacional. Mal puede haber paz y tranquilidad si el gobierno y los consorcios a que sirve emplean la fuerza de su autoridad y de sus armas y el poder de su propaganda para perseguir y oprimir a miles de ciudadanos y cuando, ante el afloramiento del malestar, no encuentra otro camino para conjurarlo que desencadenar nuevas violencias, con el consabido pretexto de imaginarios complots.

Ha ido tan lejos su acción destructiva que continuando por ese camino pondrá en riesgo la existencia misma de la nacionalidad. De ahí entonces que anotemos la urgencia de ir a una movilización activa de todas las voluntades, y una conjunción cívica de esfuerzos para lograr que la nación retome el cauce democrático y constitucional, que le permita encontrar las condiciones básicas que se requiere para encarar sus graves problemas.

Si es que aún queda un ápice de sentido de responsabilidad en los hombres de gobierno y si todavía se inquietan ante el veredicto de la historia, la proximidad de la fecha en que deben renovarse los poderes del Estado abre una posibilidad para encontrar una salida a la tensión en que vive actualmente el país y para colocarlo en condiciones de hacer frente al difícil porvenir, sin necesidad de que sobrevengan trastornos radicales.

El restablecimiento amplio e irrestricto de las libertades individuales y ciudadanas acordadas por la Constitución, sería un primer paso efectivo hacia el apaciguamiento de los espíritus y la reconciliación de la familia boliviana. El otorgamiento de las garantías que la ley establece, para el desarrollo de un proceso eectoral correcto y libre, que culmine en comicios en los que el pueblo pueda expresar su voluntad, sin coersión ni interferencia, para la formación de un gobierno respaldado por una gran mayoría ciudadana, permitiría llevar la pugna política por el camino democrático, haciendo desaparecer las actuales condiciones de violencia que impiden el desenvolvimiento de las actividades generales del país. Un gobierno surgido de una elección verazmente democrática y con un amplio respaldo ciudadano, podrá enfrentar exitosamente las tareas de reconstrucción nacional.

Pese al propósito enunciado por el nuevo Ministro de Gobierno de "exigir el cumplimiento de los preceptos de la Carta Magna y de las leyes que nos rigen", en un tácito reconocimiento de que no eran acatados por sus antecesores, por la propia naturaleza del régimen y el conocido sectarismo del PURS, no cabe concebir muchas ilusiones sobre la posibilidad de un gesto que requiere patriotismo y verdadera grandeza política.

Los días venideros, hasta promediar este año, serán decisivos para el porvenir de Bolivia. Si hasta entonces el gobierno no da los primeros pasos de un cambio efectivo en su política, se habrá hecho evidente su propósito de perpetuar el despotismo, con su secuela de corrupción y miseria, por un nuevo período, y sin duda que serán muy graves las consecuencias de una actitud semejante.

Si el gobierno se empeña en mofarse una vez más de la voluntad popular y pretende imponerse, nuevamente, por la violencia y el fraude, el pueblo sabrá encontrar su camino, porque Bolivia se salvará necesariamente, recuperando su libertad para constituir por las vías democráticas los poderes públicos, y marchar, en un régimen de justicia, paz y trabajo, hacia superiores estadios de progreso. La suerte de la nación está por encima del ciego egoismo de la minoría gobernante.

Cualquiera que sea el camino a seguir, el instrumento para la acción política del pueblo es el partido. En réplica de la historia a la obra destructora de la oligarquía, el MNR está forjando la realización del destino nacional.

Constituído por profesionales, pequeños comerciantes e industriales, trabajadores de las minas, de la industria y de otras actividades, campesinos, empleados del Estado y de la empresa privada, representamos los intereses y anhelos de la gran mayoría nacional. Y nuestro planteamiento de los objetivos de lucha se conforma a la realidad política, económica y social del país.

El MNR ha contribuido decisivamente a formar la profunda conciencia política y social que hoy existe en los sectores mayoritarios de la población. Al señalar las causas de la paradojal miseria del Estado y pueblo bolivianos en un país inmensamente rico, el MNR ha concretado los objetivos de la lucha política del pueblo, sacando a ésta del terreno de la vaga palabrería empleada por los viejos partidos, para situarla en el terreno de las reivindicaciones económicas y sociales. Con nosotros el pueblo boliviano ha recobrado la fé en sí mismo, liberándose de complejos de inferioridad con que se pretendió anonadarlo. Al conocer las causas reales de su sufrimiento y comprobar la posibilidad de eliminarlas, el pueblo boliviano adquirió seguridad y confianza en su destino.

El pueblo tiene fé en el MNR porque en su actuación como opositor al régimen Peñaranda, durante su breve paso por el gobierno y en la dura y sacrificada etapa de lucha desde la restauración de la Rosca en el poder, se ha cenido leal e inquebrantablemente a su interpretación teórica y al planteamiento de los grandes objetivos de su acción. En esta invariable conducta al servicio del interés nacional radica la clave de por qué el MNR ha logrado, por primera vez en nuestra historia, movilizar masas ciudadanas tan grandes en una lucha política activa, manteniéndolas emocionadamente durante largo tiempo, sin desmayo ni claudicaciones, y con un espíritu de sacrificio lindante con frecuencia en lo heroico, que sólo tiene parangón en la lucha librada por la Independencia.

La derrota del movimiento revolucionario de agosto de 1949 en el que nuestros hombres, algunos jefes y oficiales del ejército y ciudadanos de convicción nacionalista, junto con los mineros, petroleros y trabajadores en general, enfrentaron gallardamente el mecanismo bélico de los opresores, no tiene más alcance que el de una batalla perdida. No podía significar el cierre definitivo del camino de liberación del pueblo boliviano, consolidando al régimen antinacional. Por sobre el triunfo militar, el proceso continúa, con decadencia y descomposición del grupo gobernante, y con el fortalecimiento y clarificación de la causa popular que, ante los acontecimientos ocurridos posteriormente, adquiere mayor justificación.

Nuestro triunfo final es inevitable porque marchamos en el sentido de la historia, y este período de la evolución mundial es el de las grandes transformaciones de los pueblos oprimidos hacia la libertad y la consolidación nacional.

Para realizar la gran tarea que tenemos por delante, debemos redoblar nuestros esfuerzos. Necesitamos desarrollar toda la potencialidad del partido, a fin de ponerlo en condiciones de entrar en la lucha política próxima con su máxima capacidad.

Con absoluta certidumbre en el triunfo final, hago llegar mi cordial palabra de saludo y reconocimiento a todos los militantes del partido que sufren los rigores y torturas de las prisiones y campos de concentración, a los compañeros que soportan las penurias del destierro y a los que, dentro de Bolivia, continúan sorteando heroicamente los riesgos de la lucha clandestina; a los militantes ignorados que en cada población pequeña o grande se saben parte de una causa en que está cifrado todo el porvenir patrio, y a los luchadores que forman las inconmovibles bases del partido. Y en esta refirmación de fé, rindamos todos el homenaje de nuestro emocionado y reverente recuerdo a los miles de compañeros muertos gloriosamente en la lucha revolucionaria y a los que cayeron asesinados por los sicarios del régimen. Cumpliendo su mandato de decisión, inflexibilidad y desinterés, el sacrificio de sus vidas no será estéril. Habrá acortado la noche de explotación y terror en que vive Bolivia.

MONTEVIDEO, R. O. DEL URUGUAY - 1o DE MAYO DE 1950

VICTOR PAZ ESTENSSORO

25X1

Approved For Release 2005/04/22 : CIA-RDP83-00415R005300010004-7

Approved For Release 2005/04/22 : CIA-RDP83-00415R005300010004-7

Next 1 Page(s) In Document Exempt

25X1

Approved For Release 2005/04/22 : CIA-RDP83-00415R005300010004-7